

La reconstrucción desastrosa

Por Iván Poduje

Arquitecto



Mañana se cumple un año desde que un grupo de brigadistas de Conaf se coordinó para quemar la reserva forestal de Peñuelas, con el objetivo de cobrar horas extras apagando el fuego. La fiscalía demostró que estos criminales prendieron varios focos, sabiendo que el viento y el calor del 2 de febrero de 2024, propagaría rápidamente su desastre.

Y eso fue lo que ocurrió. En pocas horas se levantó una masa de fuego de 12 kilómetros de largo por cuatro kilómetros de ancho, que avanzó rápidamente hacia Viña del Mar y Quilpué destruyendo 5.800 viviendas y matando a 136 personas, incluyendo adultos mayores y niños.

Los vecinos estaban acostumbrados a estos incendios forestales que partían en Peñuelas. Los veían desde sus barrios y esperaban que el fuego estuviera encima, antes de arrancar para no abandonar sus casas. El 3 de febrero de 2024 hicieron lo mismo, sin saber que el fuego había alcanzado una magnitud y una velocidad nunca vista. Y no sabían por que las instituciones a cargo de alertarlo no hicieron su tarea. La negligencia fatal de la Conaf, el Senapred y los municipios de Viña del Mar y Quilpué quedó plasmada en dos informes de la Cámara de Diputados y la Contraloría.

Para empeorar la situación, el Ministerio de Vivienda estaba en plena crisis del caso convenios. Quizás por ello, se designa como coordinadora de la reconstrucción a la ministra de Desarrollo Social Javiera Toro, que no tenía ni la experiencia ni las atribuciones para liderar con esta complejísima tarea.

Desde el primer día, el Presidente Sebastián Piñera le pidió a un grupo de ex colaboradores un diagnóstico de los daños y una estrategia para apoyar al gobierno, aplicando todas las enseñanzas del 27F. Nos pidió reserva, para que esta ayuda no fuera contaminada por la refriega política. El 6 de febrero el Presidente nos mandó una instrucción en el chat grupal, pocas horas antes de subirse al helicóptero que terminó con su

vida en el lago Ranco.

En honor a su memoria, y a las víctimas del incendio, cerramos el trabajo y lo entregamos al gobierno el 14 de febrero en una ceremonia en La Moneda. Hubo fotos y declaraciones de prensa, pero las medidas más relevantes que sugerimos, no fueron tomadas en cuenta. De hecho repitieron los mismos errores que alertamos, como nombrar “gerentes” que no sirven para nada, o enredarse con la asignación de los subsidios.

A un año de este ataque criminal – porque eso fue lo que ocurrió en Viña – los resultados son desoladores. Se han entregado apenas 53 viviendas de las 5.800 destruidas. Otras 196 están en construcción y solo el 10% de los damnificados tiene un subsidio habitacional. Pese a que se destinaron 1.000 millones de dólares para la reconstrucción, el gobierno le ha negado recursos a miles de personas que declara “inhábiles” para acceder a una casa y todos los meses amenaza con cortar el subsidio de arriendo que debiera durar hasta que la reconstrucción esté terminada. Pero les dicen que no hay plata, y por esta misma razón desvincularon a profesionales que prestaban ayuda social y técnica.

Con este abandono, muchos damnificados han debido salir adelante por sus propios medios. Sin recursos estatales ni supervisión técnica, reconstruyeron más de mil casas en los mismos sectores quemados, incluyendo campamentos y zonas de riesgo. Han organizado colectas, realizado marchas y solicitado audiencias, pero la respuesta siempre ha sido un portazo. La desesperación llegó a tal nivel, que esta semana un grupo de dirigentes se declaró en huelga de hambre.

¿Qué se puede esperar del último año del Presidente Boric? A la luz de lo descrito no mucho. El foco del gobierno debiera ser entregar todos los subsidios, eliminando este inhumano criterio de ser “inhábil”. Pero la verdadera reconstrucción será tarea del próximo gobierno que no solo deberá recuperar el tiempo perdido, sino que la empatía con las víctimas que pasaron del infierno del fuego, a la pesadilla de lidiar con un Estado indolente, burocrático e incompetente.